

Ante la Cruda Realidad

General ALVARO VALENCIA TOVAR

La Corte Suprema de Justicia, al declarar exequible el nombramiento de un Jefe Civil y Militar para Urabá, aceptó que el país se halla en estado de guerra. Es la primera vez que una alta institución del Estado reconoce esta verdad, ajena hasta entonces al país y a su clase dirigente.

Sí. Afrontamos una guerra de múltiples facetas, compleja, turbia, indefinida en muchos campos y por ello más difícil de descifrar y conducir. Se precisa tomar conciencia de ello y obrar en concordancia. Muchas veces se ha sostenido en esta columna la realidad de esa guerra, que por lo sutil e imprecisa no impresiona, no moviliza, no conmociona a una sociedad que ha ido penetrando en sus meandros paulatinamente, habituándose a su presencia bajo el rótulo irreal de violencia, que lo abarca todo. Panorama sangriento en el que delincuencia común, barbarie premeditada, narcotráfico rampante, guerrilla ideológica, terrorismo bestial, configuran un todo aniquilante.

Su esencia es, sin embargo, revolucionaria. Vertical porque reemplaza al choque horizontal entre ejércitos regulares, en batallas que imponían la propia voluntad mediante la destrucción del adversario. Guerra sin aviso previo, sin ultimátum, sin declaratoria, sin invasión. Conflictos de baja intensidad, los denominan eufemísticamente los estrategas occidentales. De intensidad creciente podrían rebautizarse con mayor realismo.

Comienzan con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan células expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial y, si posible, **Fuerzas Armadas e Iglesia**. Crean organismos de fachada dentro y fuera del país, señalado como objetivo, que orquestan campañas de descrédito contra el régimen que se busca demoler, y de justificación de la lucha armada. Se recurre a idiotas útiles en plan de notoriedad para que desde las toldas democráticas tor-

pedeen el sistema, desacrediten sus ejércitos, vilipendien a sus gobernantes y dejen la impresión global de corrupción, ineptitud, arbitrariedad, tiranía.

Insensiblemente se pasa a la lucha armada, mediante la implantación de focos, en un comienzo subestimados y mal atendidos. Se instalan donde las condiciones geográficas y humanas mejor favorecen su acción. Enarbolan banderas sociales para justificarse. Incorporan por persuasión o coacción jóvenes ingenuos que creen servir un ideal y después no encuentran salida. En las ciudades surgen grupos fanáticos que entremezclan terrorismo y guerrilla urbana, en un amplio repertorio de acciones espectaculares, coreadas y engrandecidas por el sensacionalismo periodístico. Se recurre a toda suerte de expedientes. Marchas campesinas, actos vandálicos en universidades, paros laborales, sabotaje, terrorismo, secuestros, asaltos bancarios, desarticulación sistemática de la economía. El país se va sumergiendo en la lucha sin entenderla del todo, ni acertar con medios eficaces de conjurarla.

En Colombia la violencia sectaria creó ambientes propicios para la acelerada progresión del fenómeno, que el apoyo externo ha provisto de medios de combate equiparables, si no superiores, a los del Ejército. Ingenuamente se cayó en el engaño de la negociación política que concedió todas las ventajas sin contraprestación alguna. Se expandieron en la tregua, incorporando nuevas regiones. Adquirieron status y un partido que realiza abiertamente la acción destabilizadora interna y de descrédito más allá de las fronteras, con la respetabilidad que da a sus miembros la investidura parlamentaria.

La oleada sangrienta que culminó con el asesinato de militares por guerrilleros camuflados en las marchas campesinas y el muy lamentado secuestro del doctor Alvaro Gómez Hurtado debería abrir los ojos de la nación a estas realidades, que no pueden seguir inadvertidas ni subestimadas. Nos hallamos ante una guerra de dimensiones tremendas y como tal hay que enfrentarla.

Se requiere unidad nacional, genuina, honrada, sin segundas intenciones. Una dirección firme y motivante, que dé la más alta prioridad en la asignación de recursos a la lucha, entendida integralmente. Es decir, con responsabilidad primaria en el instrumento armado, pero con acción paralela del Estado para atender

los ámbitos propicios para la expansión guerrillera. Con una política a largo plazo y una estrategia que la materialice y acción psicológica en la que los medios de comunicación jueguen papel preponderante. En 1932 se movilizó la nación como nunca antes para hacer frente a una agresión extranjera. Ahora debe hacerlo, si quiere conjurar una situación interna que amenaza destruir el propio ser de Colombia.

Tomado de El Tiempo, junio 3 de 1988.